

Santiago, catorce de agosto de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que rechazó el de nulidad que interpuso para invalidar la que rechazó la denuncia por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido e indemnización por daño moral y acogió la demanda de despido indebido.

Segundo: Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 483 del Código del Trabajo, contra la resolución que falle el recurso de nulidad puede deducirse el de unificación, cuando “respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia”.

Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, deriva que esta Corte declarara inadmisibile el recurso si faltan los requisitos de los incisos primero y segundo del mismo artículo. Entre estos requisitos se encuentran el de fundar el escrito e incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de las Cortes de Apelaciones o de la Corte Suprema, y el de acompañar copia de las sentencias respectivas.

Tercero: Que, conforme se indica en el recurso, la materia de derecho que se propone uniformar consiste en determinar si *“Al verificarse una excesiva tardanza entre la realización de las audiencias de juicio y la dictación de la sentencia, se pierde la percepción personal y directa de la prueba que ha de tener el Juez, vulnerándose el principio de inmediación consagrado en el artículo 425 del Código del Trabajo. Al verificarse una excesiva tardanza entre la realización de las audiencias de juicio y la dictación de la sentencia, se pierde la percepción personal y directa de la prueba que ha de tener el Juez, vulnerándose el principio de inmediación consagrado en el artículo 425 del Código del Trabajo”*.

Cuarto: Que el fallo impugnado rechazó el arbitrio de nulidad de la demandada, por los motivos del artículo 478 letra d) del Código del Trabajo, teniendo presente que: *“En relación al principio de inmediación conviene señalar que el artículo 425 del Código del Trabajo prescribe como uno de los principios formativos en material laboral, la inmediación, y al respecto es menester recordar la historia de la ley N° 20.087 que sustituyó el procedimiento laboral contemplado en el Libro V del Código del Ramo y que en su mensaje -y en relación al referido principio de inmediación- señala lo siguiente: “el contacto directo del juez en relación con las partes, el objeto del litigio y con las pruebas rendidas resulta ser el sistema más idóneo, ya que favorece enormemente la formación de la convicción del juez. Por ello, se contempla en el proyecto que las audiencias se desarrollarán ante el juez de la causa, el que las presidirá y no podrá delegar su ministerio. El incumplimiento de este deber será sancionado con la nulidad de las actuaciones, la que deberá declarar el juez de oficio o a petición de parte “. De lo antes señalado, puede advertirse que dicho principio de la inmediación se orienta a establecer el contacto directo del juez con las partes, con el objeto del juicio y con la prueba rendida sin intermediario alguno, por ello es el juez quien preside y lleva adelante la audiencia en contacto directo con todo lo que ocurre en el juicio.*

Que, dentro de esta perspectiva, ninguna de las partes litigantes ha puesto en duda que todas las audiencias fueron llevadas adelante ante una misma magistrada, y lo único que se cuestiona es la demora en la dictación de la sentencia y de la cual la recurrente reprocha un tiempo excesivo entre el momento en que se recibe la prueba y el que se dicta el fallo, porque sostiene que crecen las posibilidades de errores, y como otro reproche, señala que el fallo no argumenta y acoge



la demanda de despido injustificado, pese a tener por acreditados los hechos del despido y en los que se funda la carta del despido, o sea la efectividad de que la trabajadora sustrajo especies de propiedad del supermercado sin pagar su valor. Sin embargo, si bien es efectiva la tardanza denunciada en el recurso en la dictación de la sentencia, ello no muestra -en este caso- que el Tribunal del fondo hubiera olvidado o se hubiera desconectado del contenido de la controversia pues el litigio se resolvió dentro del ámbito de lo discutido y conforme al material probatorio aportado por las partes al juicio”.

Quinto: Que, con relación al tema jurídico planteado para ser uniformado, se ofreció, a modo de contraste, la sentencia emanada de la Corte de Apelaciones de Concepción, en los antecedentes N° 648-2023, que sostiene que se ve infringida la inmediación al verificarse que la audiencia preparatoria se celebró el 30 de marzo de 2022 y la de juicio el 11 de mayo de ese año, y recién el 21 de febrero de 2023, se lleva a efecto la audiencia de juicio, que continúa el 27 de febrero, fijó fecha de notificación de sentencia el 16 de marzo, sin embargo, aparece firmada el 11 de agosto y recién el día 18 del mismo mes se dispone su incorporación al sistema informático, y esto último por medio de una resolución dictada por una juez diversa del referido tribunal.

Afirma que se ha producido la infracción toda vez que no se trató de un lapso baladí el transcurrido entre la data de la última audiencia de juicio y la fecha en que está fechado el fallo reprochado, porque la verdad es que mediaron casi seis meses entre dichas actuaciones, cuestión que, como es lógico, conduce a concluir que el juzgador de base no estuvo razonablemente en condiciones de asumir el ejercicio intelectual de ponderación de la prueba incorporada en las mismas condiciones de conocimiento que hubieron de estar presentes en él a la hora en que la percibió por sus propios sentidos.

Además, aquello es acorde al entendimiento de estos sentenciadores, una cuestión que deviene de lo normal y corriente de las cosas, no existiendo en la causa algún antecedente que haga variar tal conclusión, máxime si se tiene en consideración, a modo de ejemplo, que en el motivo quinto, párrafo final, del fallo recurrido, el juzgador del mérito alude a la declaración de dos testigos que en verdad no depusieron en el juicio, siendo otros los testigos, tal como, por lo demás, se dejó constancia en la audiencia de preparatoria. Asimismo, en el fundamento décimo tercero (sic), se menciona una “planilla de remuneraciones”, documento que realmente no es tal. Y ello no es más que una muestra de los efectos que, en este particular caso, ha producido la vulneración al principio de la inmediación, demostrando el quiebre o laguna que en la especie se produjo entre la rendición de la prueba y su percepción, y la muy posterior data en que el juez que recibió las probanzas procedió a su análisis y ponderación, y a volcar su decisión.

Sexto: Que, como se señaló, para dar curso al recurso en análisis es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se arribe a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia que deba ser uniformada.

Así, la labor que corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma que regula la controversia al ser enfrentada con una situación equivalente resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el impugnado y los traídos como criterios de referencia.

Séptimo: Que a la luz de lo expuesto y realizado el examen descrito, tal exigencia no aparece observada, desde que la situación resuelta en esta causa no es equiparable con el que sustenta el fallo de contraste, puesto que, como se advierte de su sola lectura, la decisión que ahora se impugna, si bien reconoce la tardanza en la dictación del fallo, estima que no se vulnera la



garantía de inmediación, ya que además de haberse dictado por el mismo juez que digirió la audiencia de juicio, lo que resulta esencial es que la tardanza no tuvo efectos en la calidad de la sentencia que pondera la prueba, fija los hechos acreditados, aplica el derecho y dirime el conflicto; a diferencia de lo ocurrido en la sentencia aparejada como contraste, puesto que para concluir que se vulneró el principio de inmediación atendida la tardanza en la dictación de la sentencia, y el hecho que fue incorporada al sistema computacional en una fecha diversa a la dictada por resolución de otro juez del tribunal, tuvo especialmente presente la defectuosa ponderación de los medios de prueba del juez del grado.

Octavo: Que, por lo anteriormente expuesto, debe ser decretada la inadmisibilidad del recurso interpuesto, puesto que la necesidad de uniformidad de la materia y la disparidad de decisiones respecto de la misma, que la ley exige y que se proponen como argumento para sostenerlo, no se advierte concurrente, teniendo además presente, el carácter excepcional y especial de este arbitrio, reconocido expresamente por el artículo 483 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandada contra la sentencia de veinte de mayo de dos mil veinticuatro.

Regístrese y devuélvase.

N°20.512-2024.



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por Ministro Diego Gonzalo Simpertigue L., Los Ministros (As) Suplentes Juan Manuel Muñoz P., Jorge Luis Zepeda A. y los Abogados (as) Integrantes Leonor Etcheberry C., Fabiola Esther Lathrop G. Santiago, catorce de agosto de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a catorce de agosto de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

